

CAPÍTULO VIII

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO



La ejecución y consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha permitido al Gobierno colombiano obtener importantes logros en materia de protección de los derechos humanos de sus conciudadanos durante el año 2004. Los homicidios se redujeron en 14%, los casos de masacres en 52%, los secuestros en 35% y el desplazamiento forzado en 29%, con respecto al 2003, para no citar sino algunas violaciones contra esos derechos y libertades cometidas por las agrupaciones al margen de la ley.

El Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en proteger la vida e integridad física de poblaciones particularmente vulnerables al accionar delictivo de los grupos armados al margen de la ley. En este marco, gracias a los programas de protección impulsados por el Gobierno, durante 2004 el homicidio de sindicalistas registró una disminución de 11%, el asesinato de indígenas de 59% y, el de periodistas y concejales se redujo en un 57% y 76% respectivamente.

En desarrollo del proceso de acercamiento iniciado por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos de autodefensa en 2003, se ha posibilitado la desmovilización masiva de 3.660 miembros de esta agrupación ilegal durante los dos últimos años; además de las 2.972 desmovilizaciones individuales registradas durante 2004, procedentes de las Farc, el ELN, las autodefensas y otros grupos disidentes.

Adicionalmente, el mayor espíritu ofensivo de las Fuerzas Armadas ha permitido reducir los actos de terrorismo, que pasaron de 1.257 en el 2003 a 724 en 2004 y los atentados contra la infraestructura pública, en especial los atentados contra las torres de energía, los cuales disminuyeron de 329 en 2003 frente a 121 ataques en 2004.

No obstante los avances en materia de protección y defensa de los derechos humanos registrada durante el último año en el país, es un asunto prioritario para el Gobierno mantener y consolidar cada vez más esta tendencia. Por tal razón éste se empeñará en fortalecer su Plan de Acción contra las minas antipersonal, a fin de disminuir las víctimas por estos artefactos; en ampliar la cobertura de su programa de protección a otros grupos vulnerables - tales como los ex-mandatarios locales (alcaldes y concejales) - así como fortalecer el de los docentes, grupos poblacionales que fueron especialmente afectados por las acciones de los grupos armados ilegales durante 2004.

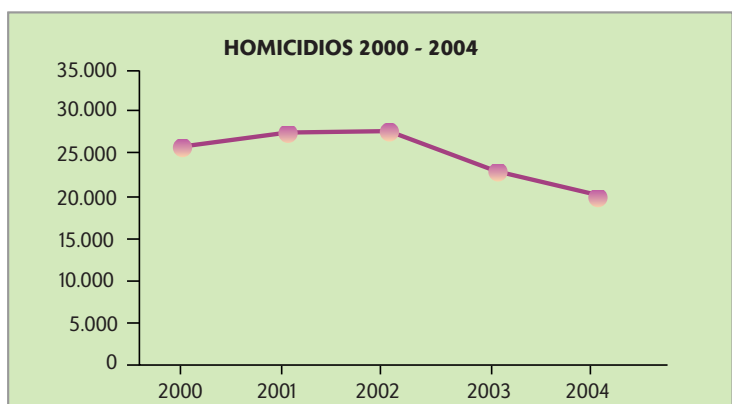


Homicidios

En el año 2004 se mantuvo la tendencia a la baja en el número de homicidios que se ha presentado desde 2003, año en el cual se evidencia un quiebre en la tendencia al alza registrada sobre esta variable desde 1998. En 2004 ocurrieron 20.167 homicidios y se observa la tasa más baja de los últimos 18 años con 44 homicidios por cada cien mil habitantes.

TASA DE HOMICIDIOS Y VICTIMAS 1994 - 2004

Año	Tasa Anual	No. Víctimas	Variación Anual
1994	70,88	26.828	-4,77%
1995	65,9	25.398	-5,33%
1996	67,8	26.642	4,90%
1997	63,35	25.379	-4,74%
1998	56,57	23.096	-9,00%
1999	58,57	24.358	5,46%
2000	62,71	26.540	8,96%
2001	64,64	27.841	4,90%
2002	65,79	28.837	3,58%
2003	52,79	23.507	-18,48%
2004	44,18	20.167	-14,87%



Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.

En 2004, el departamento que registró el mayor número de homicidios fue Valle del Cauca con 4.234, superando a Antioquia, departamento que en los últimos trece años había ocupado el primer lugar en el número de homicidios cometidos en el país. Sin embargo, el número de homicidios registrados en Valle en 2004 apenas supera los

registrados en 2003 en Antioquia, cifra que había sido la más alta en los últimos años. Hay que resaltar que aunque el departamento del Valle superó a Antioquia, no alcanzó los niveles que se presentaron en este último en la década de los noventa.

**NÚMERO DE HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTO
2003 - 2004**

DEPARTAMENTO	2003	2004	Variación %
VALLE	3945	4234	7%
ANTIOQUIA	4448	2726	-39%
BOGOTÁ D.C.	1601	1571	-2%
NORTE DE SANTANDER	1416	900	-36%
RISARALDA	813	842	4%
CALDAS	823	768	-7%
ATLANTICO	791	730	-8%
META	783	706	-10%
SANTANDER	669	603	-10%
CUNDINAMARCA	1008	575	-43%
CESAR	642	541	-16%
MAGDALENA	695	535	-23%
NARIÑO	518	491	-5%
TOLIMA	599	472	-21%
BOLIVAR	617	462	-25%
GUAJIRA	408	443	9%
CAUCA	405	436	8%
HUILA	607	416	-31%
ARAUCA	445	395	-11%
CAQUETA	325	380	17%
CASANARE	312	373	20%
BOYACA	333	317	-5%
QUINDIO	294	289	-2%
PUTUMAYO	273	249	-9%
SUCRE	257	230	-11%
CORDOBA	252	230	-9%
CHOCO	94	131	39%
GUAVIARE	105	98	-7%
AMAZONAS	13	8	-38%
SAN ANDRES	10	7	-30%
VICHADA	2	5	150%
GUAINIA	2	2	0%
VAUPÉS	2	2	0%

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.



A Valle le sigue Antioquia con 2.726 homicidios, lo cual representa una disminución del 39% con respecto al 2003, siendo, además, la cifra más baja registrada en este departamento en los últimos catorce años.

Hay que resaltar que el 51% de los homicidios ocurridos en el Valle del Cauca se produjeron en Cali, lo cual eleva la participación del departamento a nivel nacional. Este elevado número de homicidios en la capital del Valle, está aparentemente relacionado con la división entre los carteles del norte del Valle, que ha provocado enfrentamientos entre los diversos grupos. Así mismo, el dinero del narcotráfico ha permeado las organizaciones delincuenciales de la ciudad, lo que ha implicado la disposición de mayores recursos para el crimen que generalmente están relacionados con un aumento en el número de homicidios.

Al igual que en Valle, la mayoría de los homicidios registrados en Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Atlántico, Risaralda y Meta se registran en las capitales departamentales. Así en Medellín se concentró 40% de los homicidios del departamento, en Cúcuta 45%, en Pereira 50%, en Manizales 30%, en Barranquilla 58% y en Villavicencio 27%.

La declaración de tregua por parte de las autodefensas en diciembre de 2002 y la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, que redujo la violencia en las comunas de Medellín, ciudad donde se concentra el 40% del total de homicidios registrados en el departamento, puede explicar la disminución significativa de este delito en Antioquia; sumado a lo anterior, es destacable la labor en materia de inteligencia y prevención que desarrolló la Policía Metropolitana de Medellín.

Mientras que la tendencia a la baja en el número de homicidios registrados en Medellín se viene consolidando desde 2003, el número de homicidios presentados en Cali por primera vez superan los acaecidos en Medellín para ese mismo año. Lo anterior parece indicar que el trabajo realizado por las autoridades locales en Antioquia y en especial en Medellín se refleja en mejores niveles de seguridad y menores índices de violencia, como también ha venido sucediendo en el Distrito Capital desde 1994, con respecto al tema de homicidios.

El Distrito Capital que ocupa el tercer lugar con 1.571, registró una disminución del 2%, Norte de Santander con 900 presentó una reducción del 36% y Risaralda un aumento del 4% con 842 homicidios.

En 23 de los 32 departamentos, se registraron disminuciones en el número de homicidios al comparar este año con el anterior: Cundinamarca (43%), Antioquia (39%), Amazonas (38%), Norte de Santander (36%), Huila (31%), San Andrés, Bolívar, Magdalena, Tolima, Cesar, Putumayo, Sucre, Arauca, Meta, Santander, Córdoba, Guaviare, Atlántico, Caldas, Nariño, Boyacá, Distrito Capital y Quindío.

En Guainía se mantuvo el nivel de homicidios, mientras que en Vichada, Chocó, Casanare, Caquetá, Guajira, Cauca, Valle y Risaralda, se registraron aumentos al comparar los años 2003 y 2004.

En cuanto a tasas de homicidios, las más altas a nivel municipal se concentraron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Norte de Santander y Risaralda. La tasa de homicidios más alta se registró en San Juan de Arama (Meta), con 410 homicidios por cada cien mil habitantes; aunque disminuyó con respecto a 2003, ocupó el primer lugar en 2004. Le sigue Tame (Arauca) con una tasa de 342.22, Mesetas (Meta) con 322.38, Tibú (Norte de Santander) con 321.20, el Castillo (Meta) con 318.63, San Francisco (Antioquia) con una tasa de 315.86, Fuente de Oro (Meta) con 314.62, Balboa (Risaralda) con 310.43, Labrazangrande con 308.51, El Dorado (Meta) con 296.73, Puerto Rondón (Arauca) con 288.94, El Tarra (Norte de Santander) con 274.16, Vistahermosa (Meta) con 273.48, Argelia (Antioquia) con 260.28 y Aguazul (Casanare) con 254.71.

A pesar de tener las tasas más altas a nivel nacional en 2004, San Juan de Arama, Tame, Mesetas, Tibú, El Castillo y San Francisco, registraron tasas de homicidios inferiores a las registradas en 2003, mientras que Fuente de Oro, Balboa, Labrazangrande, El Dorado, Puerto Rondón, Vistahermosa, Argelia y Aguazul, elevaron sus tasas de homicidios. En este último municipio, la situación está relacionada con los constantes enfrentamientos que se registraron durante 2004 entre miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare y miembros del bloque Centauros de las AUC. Por último El Tarra, mantuvo un nivel similar al número de homicidios registrados en 2003.

Masacres

Las masacres también presentan una tendencia a la baja, al pasar de 1.403 víctimas en el 2000 a 1.044 en el 2001; en 2002 se presentó una reducción del 35%, al registrarse 680 víctimas; en 2003 se presentaron 504 (-26%) y en 2004, 259 (-49%).



Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.



VÍCTIMAS DE MASACRES SEGÚN RESPONSABLES Y AÑOS

AUTO	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
SIN ESTABLECER	500	609	309	367	118	1903
AUTODEFENSAS	701	281	59	18	13	1072
FARC	161	120	295	79	115	770
ELN	41	22	17	36		116
DELINCUENCIA COMUN				4	13	17
ERG		7				7
ERP		5				5
TOTAL	1403	1044	680	504	259	3890

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas

Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.

Para 2004 se presentaron casos de masacres en quince de los 32 departamentos, siendo Valle el más afectado, al igual que en materia de homicidios; sin embargo, a pesar de ocupar el primer lugar, este departamento registró una disminución de 40% con respecto al número de víctimas presentadas durante 2003. De estos quince departamentos, en cuatro de ellos se registraron aumentos: en Casanare de 375%, en Norte de Santander de 114%, en Meta de 60% y en Cauca de 44%. En Huila se mantuvo el mismo nivel de víctimas que en el año 2003. Por otro lado, en nueve departamentos se presentaron disminuciones en el número de víctimas de masacres, siendo Cundinamarca el departamento donde se registró la más significativa, al pasar de 112 víctimas en 2003 a 4 en el 2004; así mismo, se presentaron reducciones en Tolima, Guajira, Arauca, Sucre, Valle, Antioquia, Caldas y Boyacá.

Para el 2003 no se presentaron masacres en Chocó, mientras que en 2004 se registró una masacre en el mes de julio en Novita, donde desconocidos asesinaron a tres hombres y dos mujeres. En los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío y Risaralda, departamentos donde se habían presentado masacres en el 2003, no registró ningún caso en 2004.

VÍCTIMAS DE MASACRES DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTOS DE POLICÍA Y VARIACIÓN PORCENTUAL DE MAYOR A MENOR CON BASE EN LAS CIFRAS DE 2004

DEPARTAMENTO	2003	2004	Variación %
VALLE	84	50	-40%
NORTE SANTANDER	22	47	114%
ANTIOQUIA	77	46	-40%
META	15	24	60%
CASANARE	4	19	375%
ARAUCA	30	16	-47%
CAUCA	9	13	44%
BOYACA	13	10	-23%
CALDAS	12	8	-33%
CHOCO		5	
SUCRE	9	5	-44%
CUNDINAMARCA	112	4	-96%
GUAJIRA	12	4	-67%
HUILA	4	4	0%
TOLIMA	22	4	-82%
ATLANTICO	4		-100%
BOLIVAR	4		-100%
CAQUETA	14		-100%
CESAR	8		-100%
CORDOBA	4		-100%
MAGDALENA	5		-100%
NARIÑO	12		-100%
PUTUMAYO	8		-100%
QUINDIO	5		-100%
RISARALDA	9		-100%
SANTANDER	6		-11%
GUAVIARE	149		-100%

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.

Situación de los derechos humanos de los indígenas

Durante el último año se ha venido presentando una importante disminución en el número de indígenas víctimas de homicidio, al pasar de 211 en 2003 a 86 en 2004, lo que equivale a una reducción del 59%⁹⁸. Cabe anotar que todos los registros

⁹⁸ Dentro de esta cifra se incluyen la totalidad de indígenas asesinados sin hacer distinción entre los homicidios selectivos y los múltiples (masacres).



*Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

mensuales de víctimas de 2004 se encuentran por debajo de los presentados durante 2003, con excepción de junio, noviembre y diciembre.

Las etnias más afectadas durante 2004 fueron la Nasa o Páez, la Embera Chamí y la Kankuamo con 15% cada una; en segundo lugar se encuentra la Wayúu con 7%, la Arhuaco y la Embera Katío con 6% cada uno y la Wiwa con 5%; sin embargo sobre el 14% de las víctimas por homicidio no se precisa la etnia. Vale la pena resaltar la significativa disminución en el número de integrantes de la etnia Kankuamo asesinados en el año 2004 (13), después del registro de 100 víctimas en el año 2003. De igual forma, la etnia Embera Chamí pasó de 22 a 13 víctimas y la Wayúu de 9 a 6, mientras que las víctimas Embera Katío aumentaron de 2 a 5 y los Nasa o Páez de 8 a 13 entre los dos años.

Es importante llamar la atención sobre la situación humanitaria que ha tenido lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde cuatro etnias – Kogui, Wiwa, Kankuamo y Arhuaco – se encuentran asediadas por la guerrilla, en especial las Farc, y las autodefensas. Los grupos armados al margen de la ley acusan a los pueblos indígenas de pertenecer al bando contrario y, por otra parte, con su accionar pretenden evitar que los indígenas de la Sierra se constituyan en un movimiento de resistencia civil que frene sus negocios ilícitos y poderío.

En este sentido, es de particular relevancia anotar que durante 2004 las Farc atentaron contra la identidad colectiva, religiosa y cultural de estos pueblos, asesinando a sus líderes sociales y “mamos”, que son guías espirituales de estas comunidades, vulnerando además del derecho a la vida, el derecho a la diferencia y a la organización propia de los pueblos indígenas. Por otro lado, las autodefensas persistieron en estigmatizar a estos pueblos ancestrales como colaboradores de la guerrilla, amenazando y asesinando a sus integrantes.

INDÍGENAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS POR ETNIA 2003 - 2004

ETNIA	2003	2004	TOTAL
EMBERA CHAMI	22	13	-41%
KANKUAMO	100	13	-87%
NASA O PAEZ	8	13	63%
NO PRECISA	18	12	-33%
WAYUU	9	6	-33%
ARHUACO	7	5	-29%
EMBERA KATIO	2	5	150%
WIWA		4	100%
EMBERA	3	3	0%
KOGUI		3	100%
SIONA		3	100%
SIKUANI O GUAHÍBO		2	100%
INGA	3	1	-67%
PIJAO	1	1	0%
U'WA		1	100%
YANACONA	1	1	-100%
ARZARIO O WIWA	2		-100%
AWA KWAIKER	3		-100%
BARI	2		-100%
BETOYE (GUAHIBO)	6		-100%
COYAIMA	5		-100%
KAMËNTSA	2		-100%
KAMSÁ	1		-100%
KUIBA	1		-100%
PASTO	1		-100%
SENÚ	4		-100%
TULE (KUNA)	5		-100%
UITOTO	5		-100%
TOTAL	211	86	-59%

*Fuente: Observatorio del Programa Presidencial para los DH y DIH, Vicepresidencia de la República.
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

Vale la pena señalar que los grupos armados al margen de la ley han atacado de manera recurrente a los indígenas, porque varias comunidades han creado movimientos de resistencia que han logrado liberar secuestrados e impedir la perpetración de otras violaciones. Lo anterior ha avivado la intolerancia de los grupos armados hacia quienes contrarían sus acciones y se resisten a su proceder.



La mayoría de las víctimas por homicidio se registraron en el departamento de Cauca con 17%, específicamente en los municipios López, Corinto, Caldoño, Miranda, Toribío, Santander de Quilichao y Popayán; seguido por Cesar con 15%, en los municipios de Valledupar, Chemesquemena y Atanquez; La Guajira con 12% en los municipios de Uribía, Urumita y Riohacha, y Caldas con 10% en los municipios de Riosucio y Belalcázar. Mientras que para 2003, Cesar con 38% se constituía en el principal departamento afectado por el asesinato de indígenas, seguido por Magdalena con 14%, Caldas con 8% y Chocó con 7%. De tal manera que Cesar, durante 2004, disminuyó su participación en 23 puntos con respecto a 2003, al pasar de 38% a 15%, Magdalena en 7 puntos al pasar de 14% a 7%, mientras que la situación en Cauca se deterioró con un aumento en su porcentaje de participación de 14 puntos al pasar de 3% a 17%, así mismo Caldas ha aumentado su porcentaje de participación en 2 puntos al pasar de 8% a 10%.

De los 86 indígenas asesinados en 2004, desconocidos fueron responsables de 34 homicidios, las Farc de 17, las autodefensas de 15, otros autores de 9 y el ELN de 2. Sin embargo sobre 9 de las víctimas no se estableció el autor. Por el contrario, para el año 2003, el orden de los responsables ubicaba a las autodefensas como el principal autor de los homicidios con 86 indígenas asesinados, desconocidos con 51, las Farc con 23, otros autores con 13, el ELN con 10, mientras que sobre 28 de los homicidios no se conocía el autor.

En lo que se refiere a casos de homicidios múltiples, se tiene que el 15 de enero en Puerto Asís (Putumayo) fueron asesinados tres indígenas de la etnia Siona; el 20 de enero, en Riohacha (Guajira) se registró una masacre de cuatro indígenas de la etnia Wiwa, perpetrada por desconocidos; el 27 de febrero, las autodefensas asesinaron a tres indígenas en Buenaventura (Valle); el 10 de marzo, miembros de las Farc asesinaron a tres indígenas Embera Chamí en Mistrató (Risaralda); el 17 de marzo, desconocidos asesinaron a tres indígenas de la etnia Embera Chamí en Riosucio (Caldas); el 17 de abril, desconocidos asesinaron a tres indígenas Embera en el municipio de López en el Cauca; el 18 de abril, en el departamento de la Guajira, miembros de las autodefensas asesinaron a cuatro miembros de la etnia Wayúu⁹⁹; y el 7 de diciembre las Farc asesinaron en el municipio de Apartadó (Antioquia) a tres líderes de la etnia Embera Katío.

En cuanto a secuestros, en el año 2003 fueron secuestrados 39 indígenas mientras que durante 2004 fueron plagiados 31, registrándose una disminución de 21%. En el mes de marzo, tuvieron lugar dos secuestros: uno en Mistrató (Risaralda), donde miembros de las Farc secuestraron a tres miembros de los Embera Chamí, acusándolos de ser colaboradores de las autodefensas y otro en Jambaló (Cauca), donde guerrilleros sin identificar plagiaron a un joven Nasa o Páez, quien posteriormente fue liberado; en abril ocurrieron igualmente dos plagios: en el primero, miembros de las Farc secuestraron a seis indígenas en Mitú (Vaupés) y del segundo no se tiene conocimiento del número exacto de indígenas secuestrados, también por la guerrilla de las Farc en el mismo municipio; en el mes de mayo, se registraron tres secuestros cometidos por las autodefensas: en Valledupar, este grupo armado ilegal plagió a cuatro indígenas, quienes posteriormente fueron liberados; en Tierralta (Córdoba) fue secuestrado el gobernador indígena de la comunidad Embera y días después en ese mismo municipio, el mismo grupo ilegal secuestró a cuatro indígenas Embera Katío, quienes fueron liberados al día

99 El 30 de octubre de 2004, la Dijin de la Policía Nacional capturó a alias Chema Balas, presunto autor intelectual de la masacre de Bahía Portete y miembro de las autodefensas de la Guajira.



siguiente. En junio, miembros de las Farc secuestraron a un indígena Coyaima en San Vicente del Caguán, Caquetá. En agosto, miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, plagiaron a cinco indígenas Nasa o Páez que se dirigían en comitiva a San Vicente del Caguán -entre los que se encontraba el alcalde de Toribío- quienes posteriormente fueron liberados. En el mes de octubre, ocurrieron tres secuestros: en el primero, miembros de ELN plagiaron a tres indígenas Kankuamo en el municipio de Atanquez (Cesar), dos de ellos fueron liberados días después; en el departamento de Nariño, desconocidos secuestraron a un gobernador indígena de la etnia Awa y en el Alto Sinú (Córdoba) dos indígenas Embera Katio fueron plagiados por desconocidos.

En lo que atañe a los responsables de los plagios, se observa que 52% de los indígenas fueron secuestrados por las Farc, 29% por las autodefensas, 10% por el ELN y 3% por desconocidos, mientras que sobre 6% de los secuestros no se conoce el autor. La etnia más afectada por los plagios fue la Nasa o Páez y la Embera Katio con 19% respectivamente, seguidas por la Embera Chamí y la Kankuamo con 10% y la Embera, Coyaima y Awa con 3%. No obstante sobre el 32% no se tiene conocimiento de la etnia afectada. Así mismo, los departamentos más afectados han sido Cesar y Córdoba con 23% cada uno, seguido por Cauca y Vaupés con 19%, Risaralda con 10% y Caquetá y Nariño con 3% respectivamente.

Es importante señalar que en muchos departamentos del país como Córdoba y Chocó, los indígenas se encuentran asediados y sufren bloqueos alimenticios por parte de la guerrilla y los grupos de autodefensas. Los bloqueos a los que se ven sujetos traen consecuencias en el adecuado abastecimiento de alimentos y bienes a estas zonas así como en la libre circulación de sus habitantes. Un ejemplo de ello, es el de los indígenas Karapana y Pisamira en el Vaupés, que deben solicitar permiso a los grupos armados para movilizarse.

En la mayoría de los casos los territorios indígenas coinciden con las llamadas zonas de retaguardia de las guerrillas y autodefensas, quienes en su afán por permanecer en estas áreas, desplazan a los grupos indígenas. De igual manera, estos territorios son de vital importancia por su riqueza biológica y abundancia de recursos naturales, lo cual los hace propicios para el desarrollo de negocios ilegales y la presencia de actores armados irregulares.

Finamente, dentro de los desplazamientos de comunidades indígenas que tuvieron lugar durante 2004, se encuentra el caso de los Wiwa en la Guajira, los Awa en Nariño, los Coreguaje en Caquetá, los Sicuani en Guaviare, todos durante el mes de febrero; en marzo los Embera en Chocó y en abril los Wayúu en la Guajira, después de la masacre perpetrada por las autodefensas. En mayo, se presentó un desplazamiento de la comunidad Wayúu en la Guajira y de indígenas Embera en Chocó. En agosto, se registró en Ciénaga (Magdalena) el desplazamiento de miembros de la comunidad indígena de los Kogui, debido a amenazas de las Farc. En septiembre, se presentaron desplazamientos en los municipios de Puerto Concordia (Meta), cuando indígenas de la comunidad Guayabero abandonaron sus resguardos; en Anorí (Antioquia), cuando indígenas de la comunidad de Dos Vocas y Tenchi se desplazaron como consecuencia de enfrentamientos armados entre las AUC y el ELN y en Carmen de Atrato (Chocó), se registró el desplazamiento de miembros de la comunidad Embera. Así mismo, en noviembre, indígenas de la comunidad Kamenzá abandonaron el municipio de San Miguel (Putumayo) y por último en diciembre, se presentó el desplazamiento de indígenas Embera en Apartadó (Antioquia) y de la etnia Wiwa en Tame (Arauca).



DESPLAZAMIENTO DE INDÍGENAS 2004

Fecha	Departamento	Municipio	Comunidad Indígena	Infracción al DIH	Grupo Armado	No. de Hogares	No. de Personas
04-feb-04	La Guajira	San Juan del Cesar	Comunidad Wiwa	Asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, daños a viviendas, saqueo y desplazamiento	Autodefensas	800	3920
13-feb-04	Nariño	Ricaurte	Indígenas Awa	Desplazamiento por amenazas y enfrentamientos	Frente 29 de las Farc y Comuneros del sur del	89	419
22-feb-04	Caquetá	Milan	Resguardos Indígenas Coreguajes y Agua Negra	Desplazamiento, hostigamiento, movilidad, reclutamiento	Autodefensas	76	376
26-feb-04	Guaviare	San José	Cachiveras del Naré (Resguardo)	Asesinatos selectivos, desplazamiento y amenazas por combates	Frentes 22 y 85 de las Farc	24	120
29-mar-04	Chocó	Bojayá	Comunidades de Unión Cuiti (Río Napipi), Hojas Blancas (Río Hojas Blancas)	Desplazamiento y asesinatos selectivos	AUC (Bloque Elmer Cárdenas)	236	1146
29-mar-04	Chocó	Bojayá	Comunidades de Playita, Egoroquera, Baquiaza	Desplazamiento y asesinatos selectivos	AUC (Bloque Elmer Cárdenas)	120	675
27-abr-04	La Guajira	Uribia	(Familias Indígenas Wayuu)	Muertes violentas por enfrentamientos	Autodefensas	50	245
05-may-04	Chocó	Quibdó	Población Indígena Embera	Muertes violentas por enfrentamientos	Farc	14	72
10-may-04	La Guajira	Uribia, Bahía Honda y Portete	(Familias Indígenas Wayuu)	Muertes violentas por enfrentamientos	AUC	39	306
29-ago-04	Magdalena	Ciénaga	Población Indígena Coguis	Amenazas de la guerrilla de las Farc que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta	Farc	23	110
17-sep-04	Meta	Puerto Concordia	(Etnia Guayabero)	Amenaza de reclutamiento de los menores de edad del resguardo de Caño Ceiba	Farc	13	52
24-sep-04	Antioquia	Anorí	Comunidad Indígena de Dos Vocas y Tenchi	Enfrentamientos armados entre ELN y AUC (Bloque Mineros)	AUC y ELN	16	81
29-sep-04	Chocó	Cármén de Atrato	Población Indígenas Embera	Amenazas de la guerrilla de las Farc	Farc	13	46
12-nov-04	Putumayo	San Miguel	Comunidad Kamenzá	Muertes violentas por supuesta complicidad	AUC	25	123
24-dic-04	Antioquia	Apartadó	Población Indígenas Embera	Muertes violentas de tres líderes de la comunidad	Farc	33	145
31-dic-04	Arauca	Tame	Comunidad Wiwa	Enfrentamientos armados indiscriminados de las Farc	Farc	7	29
			TOTAL			1578	7865

Situación de los derechos humanos de los sindicalistas



*Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC de la Policía Nacional, CUT, ENS.
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

Tomando en cuenta información proveniente del Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), se encuentra que en el año 2004 fueron asesinados 42 trabajadores sindicalizados pertenecientes a los sectores de la salud, la agricultura, la industria, el sector público y el judicial. En el mes de enero, se registraron 6 homicidios, en febrero 3, en marzo 6, en abril 5, en mayo 4, en junio 3, en julio 4, en agosto 5, en septiembre 3, en octubre 1 y en noviembre 2.

Entre los años 2003 y 2004 se registró una disminución de 11% en los índices de homicidio de sindicalistas¹⁰⁰. De los 42 sindicalistas asesinados en el 2004, 3 eran mujeres y 39 eran hombres. Catorce departamentos, incluyendo el Distrito Capital, se vieron afectados por la violencia contra sindicalistas y tres departamentos concentraron 52% de los homicidios: Valle con 10 homicidios y Atlántico y Bolívar con 6 cada uno.

En el año 2004, 11 miembros de juntas directivas de los sindicatos fueron asesinados, 11 homicidios correspondieron a sindicalistas afiliados y hasta el momento no se cuenta con información sobre el tipo de filiación de 20 sindicalistas.

¹⁰⁰ En el 2003 se registró el asesinato de 47 trabajadores sindicalizados (sin tener en cuenta los homicidios de maestros sindicalizados). Esta cifra difiere de la presentada en el Informe Anual de DH y DIH del año 2003, porque en esa ocasión los registros no discriminaban los homicidios de maestros sindicalizados; de los sindicalistas en general.



Situación de los derechos humanos de los docentes



Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC de la Policía Nacional, CUT, ENS.
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.

Según datos del Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la situación de los maestros en cuanto a homicidios se agravó durante el último año, puesto que se presentaron 54 asesinatos en el 2003 y 68 durante el 2004.

En el año 2004, Antioquia continuó siendo el departamento que registra el mayor número de víctimas con el 15% del total de las mismas. El departamento de Norte de Santander concentró el 12% de los homicidios y registró una degradación en la situación de los docentes, al incrementarse los homicidios cometidos contra los mismos (2 durante el 2003 y 8 durante el 2004). Arauca, Cesar y Valle siguen presentando una situación preocupante, ya que concentraron el 25% de los homicidios de docentes en el país.

A diferencia de 2003¹⁰¹, en 2004 29% de los maestros no estaban afiliados a un sindicato, mientras 71% pertenecía a organizaciones de maestros de los respectivos departamentos, resultando especialmente afectadas la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) con 9 sindicalistas asesinados, la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort) con 5 y la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), también con 5.

¹⁰¹ Antioquia (Adida), Magdalena (Edumag), Arauca (Asedar), Caldas (Educal), Cesar (Aducesar), Tolima (Simatol).

Este sector vulnerable no sólo se ha visto afectado por los homicidios, sino también por el secuestro, al igual que los indígenas y los mandatarios locales.

Durante el 2003, 27 docentes fueron secuestrados y 17 en el 2004, lo que representa una reducción del 37% en los secuestros realizados contra educadores. En el 2004, Antioquia continuó siendo el departamento que registra el mayor número de plagios de docentes, al representar 29% del total de plagios realizados en el país (principalmente en el municipio de Frontino), le siguen los departamentos de Cauca y Valle, que representan el 12% del total nacional respectivamente.

Durante el 2004, la mayoría de los docentes (82%) fueron liberados por los grupos al margen de la ley (76%), y 6% por la presión ejercida por la Fuerza Pública. De igual forma, durante el 2003 fueron rescatados por la Fuerza Pública el 7% de los docentes secuestrados y durante el 2004, el 6%.

En el 2004, las Farc continuaron siendo el principal responsable de los plagios con el 53%, seguido por los grupos de delincuencia común y desconocidos con el 18% respectivamente y las autodefensas y el ELN con el 5.5% cada uno, lo que evidencia una considerable reducción en el número de secuestros realizados por el ELN.

Situación de los derechos humanos de las autoridades locales



Fuente: Policía Nacional y Federación Colombiana de Municipios.
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.



Al confrontar las cifras de homicidios de alcaldes y ex-alcaldes ocurridos durante 2003 y 2004, se pasó de 12 durante el primer año a 14 en el segundo, lo que representa un incremento del 17%. La anterior situación se debe principalmente al aumento en el número de homicidios de ex-alcaldes durante el 2004, el cual pasó de 3 a 11. Sin embargo, en relación con los homicidios de alcaldes en ejercicio, se observa una situación favorable, al disminuirse los asesinatos en un 67% entre un año y el otro.

De acuerdo con el cotejo realizado entre los datos de la Policía Nacional y la Federación Colombiana de Municipios, durante el 2003 fueron asesinados 9 alcaldes y 3 ex-alcaldes, mientras que durante el 2004, se invierte la tendencia al presentarse el asesinato de 11 ex-alcaldes y 3 alcaldes.

Los departamentos más afectados durante el 2003 fueron Cauca donde fueron ultimados dos alcaldes y un ex-alcalde y Norte de Santander, donde murieron dos ex-alcaldes. Durante el 2004, se observa una tendencia creciente en este último departamento, donde fueron asesinados tres mandatarios, dos de los cuales eran ex-alcaldes del municipio de Abrego. De otro lado, los departamentos de Caldas y Meta enfrentaron una situación preocupante durante el 2004, al registrarse el homicidio de dos de sus ex-mandatarios respectivamente.

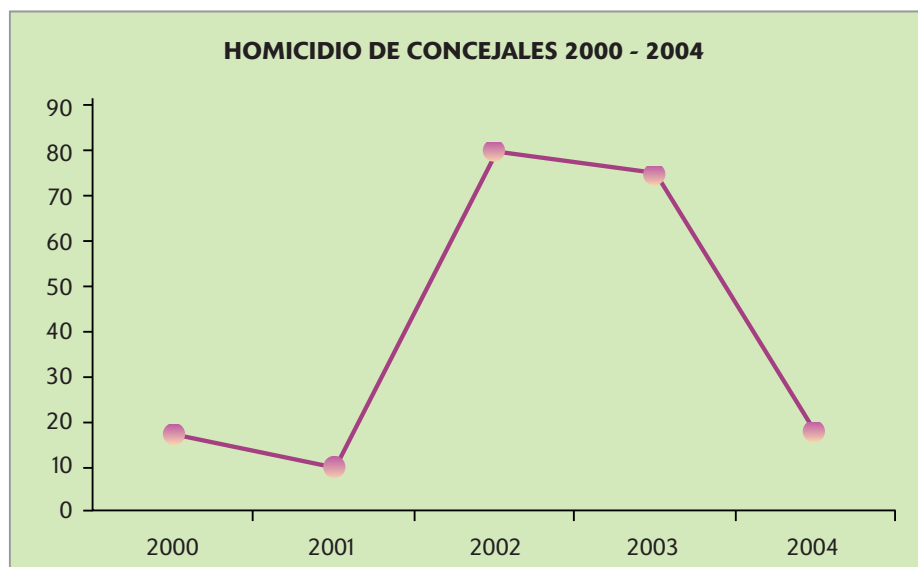
En cuanto a secuestros de alcaldes y ex-alcaldes, durante el 2003 fueron plagiados 4 alcaldes, 3 de los cuales por las Farc. El primer secuestro ocurrió a mediados de enero en el municipio de Sácama (Casanare), cuyo alcalde fue secuestrado por el frente 28 de las Farc y posteriormente liberado. En febrero de ese año, fue secuestrado por el ELN el alcalde de Providencia (Nariño) en el municipio de Samaniego. El tercer caso ocurrió en el municipio de Silvia (Cauca), cuando guerrilleros del frente Jacobo Arenas de las Farc plagiaron al alcalde de ese municipio, quien fue liberado posteriormente. Por último, el 28 de agosto de 2003 fue plagiado el mandatario del municipio de Guática (Risaralda) por el frente 47 de las Farc.

Durante el 2004, se presentaron 6 secuestros que arrojaron 7 víctimas de los mismos: en marzo, integrantes del frente 30 de las Farc hostigaron el puesto de Policía del corregimiento de Fenicia en Riofrío (Valle) y secuestraron al ex-alcalde de esta localidad, quien fue liberado debido a la presión de la Fuerza Pública. En junio, miembros del frente 59 de las Farc secuestraron a la ex-alcaldesa de Uribía (Guajira), quien fue liberada cinco meses después.

Durante el mes de agosto fueron plagiados 4 alcaldes y un ex-alcalde, todos por parte de las Farc. El primero, fue plagiado el mandatario de Toribío (Cauca), junto con el ex-alcalde del municipio y el gobernador indígena por la columna Teófilo Forero de las Farc, quienes fueron posteriormente liberados debido a una movilización de la comunidad Páez a la cual pertenecía el alcalde. Por otra parte, guerrilleros del frente 29 Alfonso Arteaga de las Farc secuestraron al alcalde de Ricaurte (Nariño), quien fue rescatado por miembros de la Fuerza Pública, días después. En Chámeza (Casanare), miembros del frente 56 de las Farc secuestraron al alcalde de ese municipio, quien luego fue asesinado. Por último, el alcalde de Becerril (Cesar) también fue plagiado durante este mes y liberado posteriormente.

De igual manera, durante el 2004 se presentaron dos atentados contra los alcaldes del municipio de Sevilla (Valle del Cauca) y del municipio de Gigante (Huila).

Respecto de la situación de los concejales, según la Federación Nacional de Concejales (Fenacón) y la Policía Nacional, en 2004 fueron asesinados 18 concejales, presentándose una disminución del 76% con respecto al 2003, año en el cual fueron asesinados 75. Así mismo, se puede observar que en los últimos cinco años, 2002 con 80 homicidios y 2003 con 75 fueron los años más críticos para este grupo vulnerable.



*Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas y Fenacom.
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

De los 32 departamentos del país, en 12 se presentaron homicidios de concejales: tres en Valle; dos en Caquetá, Meta, Putumayo y Sucre respectivamente; Antioquia, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila y Tolima con uno respectivamente. Sobre 67% de los casos no se tiene conocimiento del autor, las Farc fueron responsables de 21% de los asesinatos de concejales, mientras que las autodefensas y la delincuencia común fueron responsables de 6% de los homicidios cada uno.

Adicionalmente, fueron asesinados doce ex-concejales: en enero fue ultimado un ex-concejal en Puerto Libertador (Córdoba) y otro en San Juan (Córdoba), ambos por las AUC. En febrero, fueron asesinados un ex-concejal de Montelíbano (Córdoba) y uno de La Plata (Huila), por parte de desconocidos. En abril, desconocidos mataron a un ex-concejal de Tauramena (Casanare) y en mayo, desconocidos asesinaron a un ex-concejal de Balcón del Cesar (Cesar). En junio, fue muerto un ex-concejal de Alcalá (Valle) y en julio otro en Tulúa (Valle), ambos por desconocidos. Para el mes de agosto, fue ultimado



por parte de las Farc un ex-concejal de Chámeza (Casanare) y en septiembre, desconocidos asesinaron a un ex-concejal de Sevilla (Valle). Finalmente en octubre, desconocidos mataron a un ex-concejal de Fortúl (Arauca) y de Santander de Quilichao (Cauca).

En cuanto a secuestros, según datos de Fondelibertad, el 13 de enero de 2004, miembros del frente 32 de las Farc secuestraron a un concejal de Puerto Guzmán (Putumayo), quien fue encontrado muerto luego por las autoridades. El 10 de mayo de 2004, miembros del ERP secuestraron a tres concejales y un ex-concejal de Montecristo (Bolívar), quienes posteriormente fueron liberados. En agosto fue plagiado junto con el alcalde de Chámeza (Casanare), un ex-concejal de este municipio, quien aún se encuentra en cautiverio. En diciembre, desconocidos secuestraron a un ex-concejal de Sardinata (Norte de Santander), quien aún se encuentra cautivo.

Según datos de Fenacon, en el 2004, 27 concejales fueron víctimas de atentados, especialmente en el departamento de Huila, donde se vieron afectados 24 de los 27 concejales: 19 en Neiva, 2 en Algeciras, uno en Gigante, uno en Rivera y uno en Campoalegre. Adicionalmente, se presentaron atentados contra estos mandatarios locales en Florencia (Caquetá), Puerto Rico (Meta) y Túquerres (Nariño).

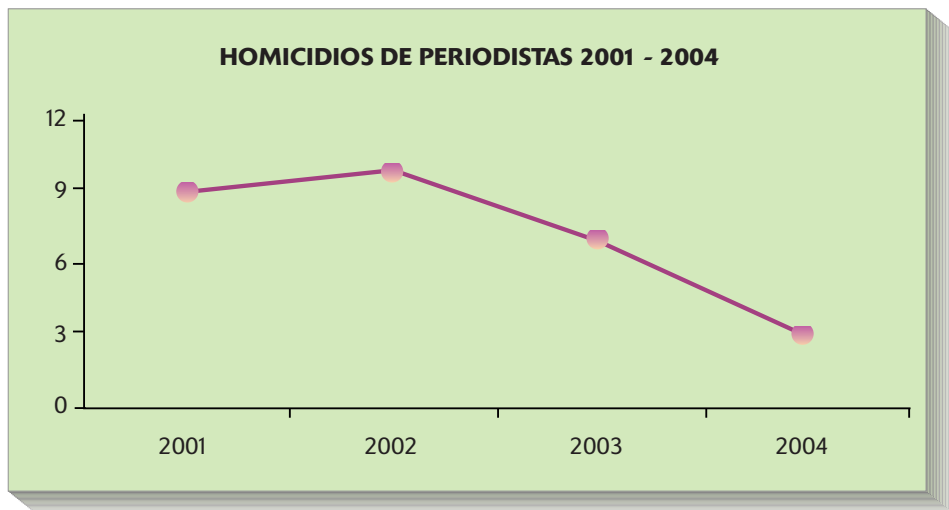
Situación de los derechos humanos de los periodistas

De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entre 2003 y 2004 se registró una disminución de 57% en el índice de homicidios de periodistas, puesto que en 2003 se presentaron 7 homicidios y 3 en 2004. En Cartago (Valle), el 4 de febrero fue asesinado el director y presentador del noticiero del CNC de Cali; en San Alberto (Cesar), el 7 de febrero, desconocidos asesinaron al gerente y propietario de la emisora La Palma Estéreo y en Aracataca (Magdalena) el 30 de marzo, desconocidos ultimaron al periodista y jefe de protocolo de la alcaldía del municipio.

Si bien durante 2004 disminuyeron los homicidios de periodistas, se presentaron otro tipo de atropellos. La situación más preocupante se dio en el municipio de Barrancabermeja a finales de enero, cuando la líder juvenil de la Organización Femenina Popular -OFP- y presentadora de la sección "Cultura por la Vida", fue secuestrada, torturada y conminada a abandonar su trabajo comunicativo por personas que se identificaron como de las autodefensas. A su vez, en abril y junio fueron víctimas de atentados el director del programa radial "El Pregón del Norte" que se trasmite en la emisora La Voz del Norte, en la ciudad de Cúcuta y el co-director del diario El Otún.

Así mismo, fueron amenazados, al parecer por grupos armados al margen de la ley, dos periodistas de la emisora Calor Estéreo de Barrancabermeja, dos periodistas de RCN Radio en Cúcuta y el director de noticias de la emisora comunitaria Café 93.5 FM en Líbano (Tolima). También se registraron amenazas telefónicas en contra de un periodista en Bogotá, tres en Cúcuta (Norte de Santander) y dos medios de comunicación de esta misma ciudad.

El conductor del programa de opinión "Quéjese" de Radio Súper y corresponsal del diario "El País" de Cali, fue amenazado en Popayán, presuntamente por pandillas y



Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

delincuencia común y la Revista Semana informó sobre amenazas proferidas contra este medio.

A pesar de no ser registrado por la Flip¹⁰², de acuerdo con la Bitácora de Prensa del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en mayo desconocidos habrían asesinado a un locutor de San Andrés de Sotavento (Córdoba), jefe de prensa de la campaña del entonces candidato y hoy alcalde de ese municipio; en octubre también habrían sido ultimados dos locutores en Florida (Valle) y el director de la emisora La Súper Estación en Cali; y se habría presentado el secuestro de un periodista y un camarógrafo del Canal Caracol en el corregimiento de Santiago, municipio de Sibundoy (Putumayo).

Secuestros

En el año 2004 se registraron 1.441 secuestros, 759 menos que en 2003 cuando se presentaron 2.200, lo que equivale a una disminución del 35%. Aunque todos los registros mensuales de este año se encuentran por debajo de los presentados durante el año anterior, es realmente a partir del mes de mayo cuando se presenta una marcada tendencia a la baja.

De los 1.441 secuestros, 748 fueron de carácter extorsivo (52%), 658 de carácter simple (46%), 13 fueron perpetrados contra miembros de la Fuerza Pública (1%) y 22 se encuentran sin definir finalidad (2%). De esta manera, el secuestro extorsivo ha disminuido

¹⁰² La Flip no ha registrado estos homicidios porque no se ha podido establecer aún si los homicidios están relacionados con la labor periodística de estos locutores.



su participación debido a que entre enero y diciembre de 2003 concentraba 67% del total de secuestros, mientras que el secuestro simple presenta una tendencia contraria: durante el año anterior, concentraba 32% de los plagios. Los secuestros contra miembros de la Fuerza Pública se han mantenido constantes en un 1%, al registrarse 25 en 2003 y 13 para 2004.

Este año se han presentado secuestros en 29 de los 32 departamentos, incluyendo el Distrito Capital, siendo el más afectado Antioquia con 220 secuestros, Bogotá con 183, Meta con 107, Cauca con 92, Tolima con 81, Magdalena con 73, Valle con 65 y Cesar y Huila con 63, cada uno.

La mayoría de los departamentos presenciaron una reducción en el número de secuestros con respecto al año anterior. Caldas fue uno de los departamentos donde más disminuyó el número de secuestros con una reducción del 83%, al pasar de 46 en 2003 a 8 durante 2004. Le sigue Cundinamarca con 79%, al pasar de 130 a 27, Caquetá con 78%, Arauca y Boyacá con 69%, Quindío con 67%, Cesar con 66%, Risaralda con 63%. También se presentaron disminuciones en la Guajira, Sucre, Bogotá, Magdalena, Chocó, Tolima, Santander, Valle, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Putumayo, Meta, Casanare y Cauca. Por el contrario, algunos departamentos vieron el número de secuestros aumentar, tales como Huila que pasó de 60 a 63 (5%), Atlántico que pasó de 4 a 12 y Vaupés que pasó de 2 a 8, sin embargo estos dos últimos siempre se han mantenido dentro de los departamentos con los más bajos niveles de secuestro. No obstante, hubo departamentos que mantuvieron el número de plagios registrados, como Guainía, Córdoba y Putumayo. Vale la pena resaltar los casos de Guaviare, San Andrés Islas y Vichada que no presentaron secuestros en todo el año.



Fuente: Fondelibertad

Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.

SECUESTROS POR DEPARTAMENTO 2003 - 2004

DEPARTAMENTO	2003	2004	VARIACIÓN %
ANTIOQUIA	286	220	-23%
BOGOTA D.C.	185	183	-1%
META	111	107	-4%
CAUCA	96	92	-4%
TOLIMA	116	81	-30%
MAGDALENA	103	73	-29%
VALLE	90	65	-28%
CESAR	186	63	-66%
HUILA	60	63	5%
SANTANDER	91	58	-36%
BOLIVAR	57	54	-5%
NARIÑO	67	45	-33%
CASANARE	53	44	-17%
LA GUAJIRA	78	39	-50%
SUCRE	71	39	-45%
CHOCO	63	35	-44%
NORTE SANTANDER	33	29	-12%
CUNDINAMARCA	130	27	-79%
RISARALDA	56	21	-63%
BOYACA	65	20	-69%
ARAUCA	49	15	-69%
PUTUMAYO	14	14	0%
CAQUETA	60	13	-78%
ATLANTICO	4	12	200%
CALDAS	46	8	-83%
VAUPES	2	8	300%
CORDOBA	6	6	0%
QUINDIO	15	5	-67%
GUAINIA	2	2	0%
GUAVIARE	1		-100%
SAN ANDRES ISLAS	1		-100%
VICHADA	3		-100%

Fuente: *Fondelibertad*

Procesado por: *Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH*
Vicepresidencia de la República.



Con respecto a los secuestros extorsivos, 16% se presentó en Antioquia, seguido por Bogotá y Valle con 7%; Cauca y Tolima con 6%; Cesar, Bolívar, Casanare y Huila con 5% cada uno, los cuales representan 62% del total de secuestros extorsivos perpetrados en el país. Por otra parte, el 31% de este tipo de secuestros fue ejecutado por las Farc, seguido por la delincuencia común con 24%, el ELN 14%, las autodefensas 10%, otras guerrillas 5% y familiares 1%; sobre el 15% de los secuestros extorsivos no se tiene conocimiento sobre el autor.

La mayoría de los secuestros simples se concentró en Bogotá con 20%, Antioquia con 13%, Meta con 12%, Magdalena con 8%, Cauca con 7%, Santander y Tolima con 5% cada uno. Estos departamentos concentran 72% del total de secuestros simples registrados en el país. A diferencia de los extorsivos, la mayoría de los secuestros simples se encuentran sin un autor establecido con 39%, en segundo lugar se encuentra la delincuencia común con 36%, las autodefensas con 7%, las Farc y los padres o madres de las víctimas con 6%, familiares y el ELN con 3% cada uno.

En cuanto a la autoría sobre la totalidad de los secuestros, la participación de los respectivos grupos ha cambiado al comparar 2003 con 2004. Para 2003, 31% de estos delitos fue perpetrado por las Farc, seguido por la delincuencia común con 19%, el ELN con 16%, las autodefensas con 8%, otras guerrillas con 2% y sobre 25% de los plagios no se ha podido establecer el autor. Por el contrario para 2004, la delincuencia común se constituye en el principal responsable con 29%, seguido por las Farc con 19% -que disminuye su porcentaje de participación con respecto a 2003-, el ELN con 9%, las autodefensas con 8%, los padres o madres de las víctimas con 3%, familiares y otras guerrillas 2% cada uno y 27% no tiene un autor establecido.

Por último, el 71% de las víctimas fueron de sexo masculino y el 28% de sexo femenino. Los menores representaron el 16% de los plagiados, siendo éste el grupo más vulnerable, pues sólo es superado en porcentaje por aquellas personas en los que la ocupación o profesión no se ha podido establecer (32%).

En 2004, 86 personas fueron plagiadas en retenes ilegales, es decir 218 menos que en 2003, cuando fueron secuestradas 304. Lo anterior se debe a que los retenes ilegales igualmente se mermaron en un 61% entre los dos años, al pasar de 79 en 2003 a 31 en 2004. Durante este último año, la mayoría de ellos tuvieron lugar en Antioquia con el 26%, seguido por Nariño con 10% y Cauca, Cesar, Chocó, Risaralda y Tolima con 6% cada uno. El mes en el que ocurrieron la mayoría de los retenes ilegales fue agosto con el 19% del total. Esta situación deja entrever la efectividad de la estrategia de seguridad en las carreteras desarrollada por el Ministerio de Defensa Nacional y los resultados positivos arrojados por las caravanas "Vive Colombia, viaja por ella".

Atentados contra la población civil

Los actos de terrorismo, en los que se agrupan aquellos hechos en los cuales fueron utilizados artefactos explosivos dirigidos de manera indiscriminada, atacando la vida y los bienes de los no combatientes, es la categoría que el Ministerio de Defensa utiliza para registrar este tipo de actos contra la población civil. Según esta fuente, el año 2004 presenta una disminución de 42% con respecto al año anterior, al pasar de 1.257 acciones a 724.



**COMPARATIVO
ACTOS DE TERRORISMO POR DEPARTAMENTO DE POLICÍA**

DEPARTAMENTO	2003	2004	VARIACIÓN
Arauca	166	84	-49%
Antioquia	165	68	-59%
Meta	39	61	56%
Huila	66	58	-12%
Putumayo	76	56	-26%
Caquetá	79	46	-42%
Nariño	57	33	-42%
Cali AM	28	33	18%
Norte de Santander	82	30	-63%
Guaviare	25	28	12%
Cauca	28	23	-18%
Boyacá	16	22	38%
Medellín AM	36	20	-44%
Bogotá D.C.	64	18	-72%
Sucre	14	18	29%
Santander	36	18	-50%
Tolima	67	14	-79%
Bolívar	37	13	-65%
Cundinamarca	32	12	-63%
Caldas	18	12	-33%
Magdalena	13	10	-23%
Atlántico	10	9	-10%
Quindío	9	9	0%
Valle	14	8	-43%
Cesar	10	6	-40%
Casanare	21	4	-81%
Chocó	4	3	-25%
Risaralda	18	3	-83%
Guajira	18	3	-83%
Guainía	1	1	0%
Urabá	3	1	-67%
Amazonas	0	0	0%
Magdalena medio	0	0	0%
San Andrés	0	0	0%
Vaupés	0	0	0%
Vichada	1	0	-100%
Córdoba	4	0	-100%
TOTAL	1.257	724	-42%

Fuente: Ministerio de Defensa

Fuente: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.

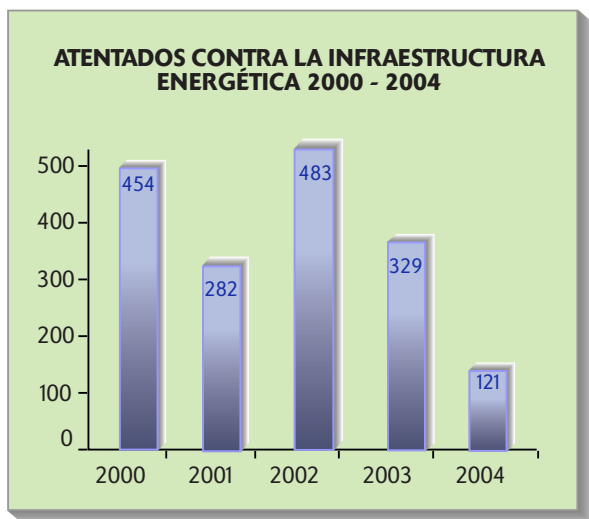


Al analizar las cifras por departamento de Policía, se evidencia una merma general en la mayoría de ellos. Se registraron disminuciones en Córdoba, Vichada, Guajira, Risaralda, Casanare, Tolima, Bogotá, la región de Urabá, Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Arauca, área Metropolitana de Medellín, Valle, Nariño, Caquetá, Cesar, Caldas, Putumayo, Chocó, Magdalena, Cauca, Huila y Atlántico; mientras que en Meta (56%), Boyacá (38%), Sucre (29%), área metropolitana de Cali (18%) y Guaviare (12%), se registraron aumentos en el número de actos de terrorismo cometidos. En Quindío y Guainía se mantuvo el mismo nivel que el año anterior. Y en Amazonas, San Andrés, Vaupés y la región del Magdalena Medio no se presentaron acciones de este tipo ni en 2003 ni en 2004.

Ataques contra la infraestructura pública

Según los datos de la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), los ataques contra la infraestructura energética en el país muestran una tendencia a la baja desde el 2002, situación que se acentúa en los dos últimos años.

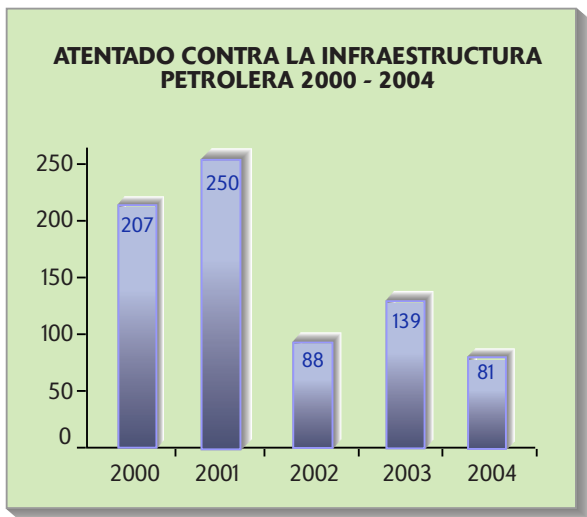
En este sentido, se observa que en el año 2000 se presentaron 454 atentados contra las torres de las empresas transportadoras y distribuidoras de energía en Colombia; para el año siguiente el número de atentados disminuyó en 38%, al presentarse 282 atentados. Para el 2002, se presentó un importante aumento de 71% en el número de torres afectadas, cuando se presentaron 483 ataques contra la infraestructura energética, la cifra más alta del periodo analizado. A partir de ese año, el descenso de los atentados se acelera y en 2003 se observa una reducción de 32% en el número de torres averiadas, al registrarse 329 atentados durante ese año. Esta tendencia continuó a lo largo de 2004 cuando 121 torres fueron afectadas, lo cual representa una disminución del 63% respecto de lo registrado en el año anterior.



Fuente: ISA - Interconexión Eléctrica S.A.
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.

Durante el año 2004, la empresa de energía más afectada por atentados contra sus torres fue, al igual que en el año anterior, Isa, que sufrió ataques contra 80 de sus torres. Esta cifra, aunque elevada, representa una importante disminución de 62% en el número de atentados contra esta empresa, pues en el año 2003 fueron derribadas 209 torres. La segunda empresa más afectada por atentados en 2004 fue la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. (Enelar), que vio afectadas 9 de sus torres (31% menos que en el año anterior). Otras empresas que sufrieron ataques contra torres de energía fueron Empresas Públicas de Medellín (EPPM) a la que derribaron 4 torres; Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca) con 3 torres afectadas; Ministerio de Minas y Energía, del que fueron dinamitadas 3 torres; Empresa Antioqueña de Energía (EADE) con 3 torres afectadas; Electrificadora del Caquetá (3 torres); Empresa de Energía de Bogotá (3 torres); Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) con 3 torres atacadas; Transelca (2 torres); Enertolima (2 torres); Electrocaribe y Electrocosta (2 torres averiadas); Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) que sufrió atentados contra 2 de sus torres y EPSA y la Electrificadora del Putumayo, que fueron víctimas cada una de un atentado.

Con respecto a ataques contra la infraestructura petrolera, de acuerdo con datos de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en 2004 se registraron 81 ataques contra oleoductos, es decir 42% menos que los registrados en 2003, año en el cual se presentaron 139 atentados, registrándose en 2004 la cifra más baja en los últimos cinco años, puesto que en 2000 se registraron 207 ataques contra oleoductos, en el 2001 aumentaron a 250 –el año más álgido de todo el periodo-, en 2002 disminuyó notablemente a 88, en el 2003 se eleva de nuevo a 139 y para 2004 se reduce hasta llegar a 81 ataques. El alto número de atentados registrados en el 2001 se debe en especial a los ataques registrados contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas, que venían aumentando desde



Fuente: Ecopetrol
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.



1995 y alcanzaron su punto máximo en 2001 año, situación que se puede atribuir a la incursión de las Farc en el departamento de Arauca y su consiguiente disputa con el ELN para captar parte de los recursos provenientes de la explotación de los hidrocarburos. Por otra parte, a partir de 2001 disminuye el número de atentados contra la infraestructura petrolera, debido a la creación de un grupo especial para ocuparse de la protección del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Parece ser la razón por la cual en los últimos años está siendo más afectado el oleoducto que hace parte de la Superintendencia de Operaciones Orito (Sor), ubicado en la zona sur del país.

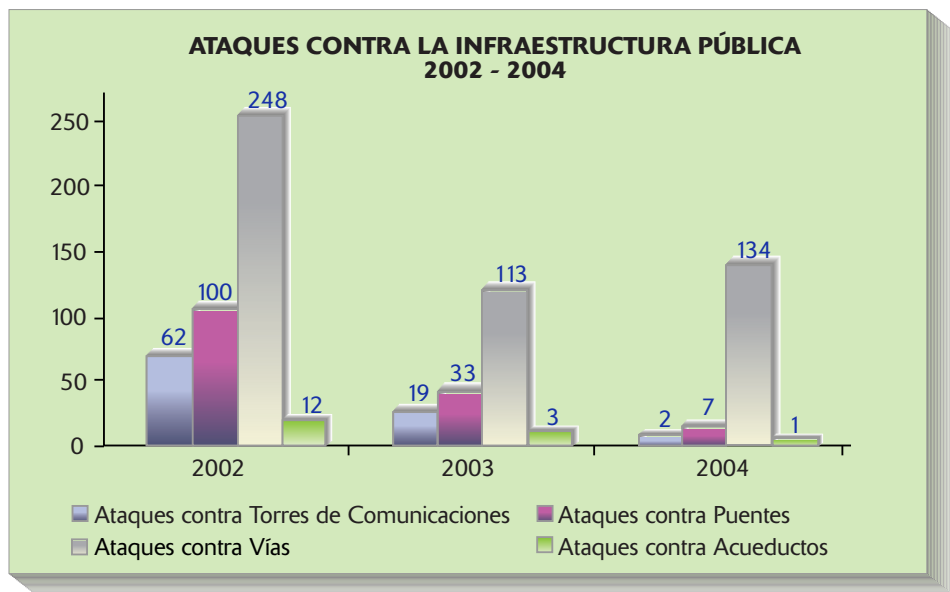
Es así como en el 2004, se presentaron 81 ataques contra la infraestructura petrolera, de los cuales el 93% fueron ataques contra oleoductos y el 7% restante contra pozos, baterías, plantas, tanques etc. 61 de estos ataques fueron perpetrados contra el Sor (55 fueron cometidos contra el oleoducto directamente), 18 contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas (todos contra el oleoducto) y 2 contra Ocesa¹⁰³, estos últimos aumentaron con respecto al año anterior al pasar de 1 en el 2003 a 2 en el 2004. Con respecto a los ataques en contra del oleoducto Caño Limón, éstos disminuyeron en 50% entre 2003 y 2004 y los del Sor en 59%.

Además de los ataques registrados en contra de los oleoductos, el resto de la infraestructura petrolera (pozos, baterías, tanques, plantas etc.), también se ha visto afectada. Con respecto a estos ataques, el año más preocupante fue el 2003, en el cual se presentaron 47 ataques, mientras que en el 2002 se habían registrado 7 y en el 2004 acaecieron 6. En términos porcentuales, para el 2004, los ataques a este tipo de infraestructura se redujeron en un 87% con respecto al año inmediatamente anterior.

En cuanto a otros ataques contra la infraestructura pública (torres de comunicaciones, puentes, acueductos y vías), se observa una tendencia a la baja en los cuatro indicadores considerados en la siguiente gráfica, a excepción de los ataques contra las vías. Por un lado, las acciones contra las torres de comunicaciones presenta un descenso sostenido desde el 2002, a presentarse 62 en ese año, 19 en el 2003 y tan sólo 2 de estas acciones en el 2004.

Los ataques contra puentes pasaron de 100 en el 2002 a 33 en el 2003 y 7 en el 2004, reduciéndose en 93% al comparar 2002 con 2004. Los atentados contra acueductos también disminuyeron al pasar de 12 en el 2002 a 3 en el 2003 y 1 en el 2004. Finalmente en cuanto a ataques contra las vías, se presentó una caída de 54% entre 2002 y 2003, al pasar de 248 casos en ese año a 113 en el 2003, sin embargo para el 2004 se eleva de nuevo el número de ataques contra vías al pasar a 134, aumentándose en un 19%.

¹⁰³ Ocesa es una empresa cuyo único activo es el oleoducto que va desde Cusiana hasta Coveñas.



Fuente: Ministerio de Defensa
 Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
 Vicepresidencia de la República.

Ataques a poblaciones

De acuerdo con la información cotejada con el Ministerio de Defensa y el Observatorio de DDHH, en 2004 se presentaron cuatro ataques indiscriminados sobre poblaciones, lo que se traduce en una disminución de 20% con respecto a 2003, cuando según la misma fuente se registraron cinco ataques a poblaciones.

En el 2003 se registraron ataques el 25 de marzo, en Ricaurte (Nariño), por parte de miembros del frente 29 de las Farc; el 18 de abril en Dolores (Tolima) presuntamente por parte de integrantes del frente 25 de las Farc; en Cumbitara (Nariño) el 30 de abril; en Piedrancha (Nariño) el 29 de junio por parte de integrantes del frente 29 de las Farc; y en Samaniego (Nariño) el 11 de julio por guerrilleros del frente 64 de las Farc.

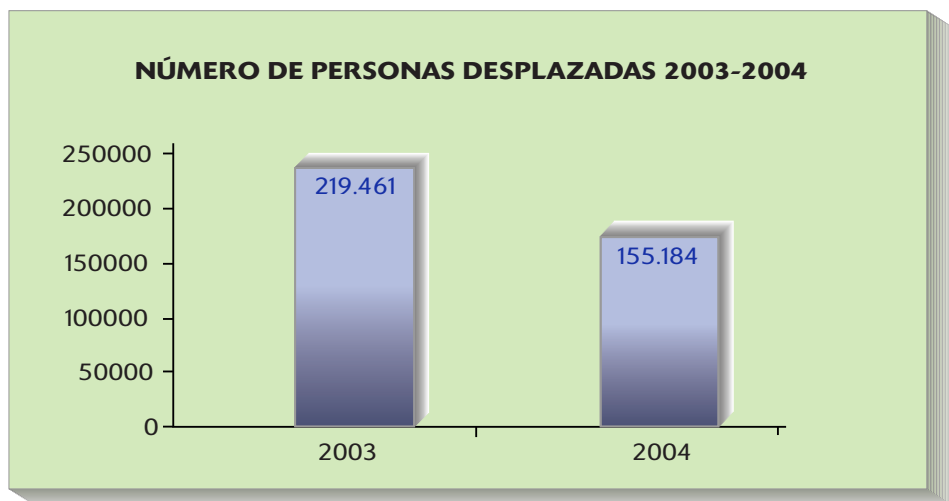
Para el 2004 se registraron ataques indiscriminados: el 24 de enero en La Llanada (Nariño), presuntamente por integrantes del frente 29 de las Farc, el 24 de abril en Uribe (Guajira) en contra de indígenas Wayuú, el 8 de agosto presuntos integrantes de las Farc atacaron el municipio de Cumbitara (Nariño) y simultáneamente el municipio de Ricaurte (Nariño)

No obstante, se tiene que resaltar que las características de los ataques a poblaciones estos dos últimos años cambiaron de naturaleza, asimilándose cada vez más a hostigamientos y mostrando una disminución en la capacidad de ataque de los grupos armados al margen de la ley.



Desplazamiento forzado¹⁰³

La información de este apartado proviene del Registro Único de Población Desplazada, en el cual se efectúa la inscripción de las declaraciones presentadas por los hogares y personas que buscan que el Estado colombiano les reconozca la condición de desplazado. Para tal efecto, la Red de Solidaridad Social cuenta con una herramienta técnica, denominada Sistema Único de Registro SUR, que busca identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características y mantener información actualizada del potencial de población a ser atendida, de la población atendida y realizar el seguimiento a los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia.



Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social.

Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

Al comparar 2004 con el año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución importante de 29% en el número de personas desplazadas entre los dos años, al pasar de 219.461 víctimas de este fenómeno en 2003, a 155.184 en 2004¹⁰³. Esta disminución responde principalmente a una reducción del 37% en las cifras de desplazamiento masivo entre un año y el siguiente, al pasar de 49.309 personas desplazadas masivamente en 2003, a 30.852 en 2004. El desplazamiento individual también se redujo de forma significativa en un 27%, al pasar de 170.152 personas desplazadas individualmente en 2003, a 124.332 en 2004.

De otro lado, según los datos del SUR, en 2004 se presentó una reducción en el número de personas expulsadas en 23 de los 33 departamentos del país, mientras que el número de personas recibidas se redujo en 29 de los mismos, respecto de lo registrado en 2003.

¹⁰⁴ Las cifras presentadas en el Informe Anual de DH y DIH año 2003 se referían a 182.076 personas desplazadas durante ese mismo año. La nueva cifra de 219.461 relacionada en el presente Informe es fruto de una consolidación de la información por parte de la RSS.

En este sentido, los cinco departamentos que mostraron las mayores reducciones en el número de personas expulsadas fueron Valle, con una disminución del 74%, al pasar de 13.491 personas expulsadas en 2003 a 3.500 en 2004; Cundinamarca, (66%) pasando de 10.827 víctimas en 2003 a 3.680 en el siguiente año; Guaviare (47%), al disminuir el número de víctimas de 5.381 en 2003 a 2.853 en 2004; Putumayo (46%), con 6.187 menos personas expulsadas en 2004 respecto del año anterior y Córdoba (45%), al pasar de 4.313 personas expulsadas en 2003 a 2.369 en 2004. Otros departamentos que presentaron disminuciones significativas en materia de desplazamiento fueron Antioquia (41%), Norte de Santander (40%), y Arauca, Bolívar, Meta y Nariño (32%, respectivamente).

En cuanto a los cinco departamentos que presentaron las mayores disminuciones en el número de personas recibidas, se encuentran Valle (66% menos), pasando de recibir 18.279 personas en 2003 a 6.241 en el año siguiente; Guaviare (65%), con 1.331 personas recibidas en 2004 frente a 3.827 recibidas en 2003; Cundinamarca (57%), pasando de recibir 9.974 personas en 2003 a 4.274 en 2004 y Putumayo y Antioquia (43% menos respectivamente). Otros departamentos en los que hubo importantes disminuciones en la recepción de personas desplazadas por la violencia fueron Córdoba (40%), Norte de Santander (39%), Bolívar (39%), Arauca (36%), Nariño (36%) y Cesar (35%).

Por otra parte, el panorama para el año 2004 muestra que los cinco departamentos que presentaron las cifras más altas de personas que huyeron de sus poblaciones a causa de amenazas o acciones perpetradas por los grupos armados ilegales, fueron: Antioquia, de donde salieron 18.235 personas; Cesar, con 12.044 personas expulsadas; Caquetá, con 10.549; Chocó, con 10.153 personas expulsadas y Magdalena, de donde salieron 10.086 personas en el año. Por su parte, los cinco departamentos que recibieron el mayor número de personas durante 2004 fueron Antioquia, a donde llegaron 15.227 personas desplazadas por la violencia; Bogotá D.C, con 15.125 personas recibidas; Cesar, con 9.254; Magdalena, a donde arribaron 9.135 personas en el año y Chocó, que recibió a 8.213 personas desplazadas en 2004.

Así mismo, se debe prestar especial atención a los departamentos de Vaupés, Chocó, Guainía, Casanare, Quindío y La Guajira, donde se presentaron aumentos significativos en las cifras de desplazamiento forzado durante el año 2004 respecto de lo registrado durante el año anterior.

En este sentido, se encontró que de Vaupés fueron expulsadas a causa de la violencia 599 personas en 2004 (361% más que en el año anterior, cuando salieron 130) y fueron recibidas 547 personas víctimas del desplazamiento (duplicándose en más de quince veces el número de víctimas de 2003, cuando recibió 36). En Chocó, se presentó un notable aumento de 54% en el número de personas expulsadas (de 6.594 en 2003 a 10.153 en 2004), y la cifra de personas recibidas aumentó en 130%, pasando de 3.571 a 8.213. En Casanare, se presentó un importante aumento de 51% en el número de personas que salieron del departamento en 2004 (3.215) respecto de lo registrado en



2003 (2.136), así mismo, el departamento recibió 23% más personas desplazadas en 2004 (2.216) que en 2003 (1.800); en Quindío, el aumento fue de 54% en el número de personas expulsadas, pasando de 353 en 2003 a 542 en 2004, aunque las personas que llegaron al departamento fueron 16% menos que en 2003. Finalmente, en La Guajira se presentó un aumento de 18% en las personas expulsadas del departamento (de 5.789 en 2003 a 6.807 en 2004) y la reducción en el número de personas recibidas fue muy leve, al pasar de 6.731 en 2003 a 6.718 en 2004.

En el nivel municipal, los cinco municipios que registraron las cifras más altas de población expulsada en 2004 fueron: Bojayá (Chocó) con 6.468 personas expulsadas; San Juan del Cesar (Guajira), de donde salieron 4.521 personas; Cartagena del Chairá (Caquetá), de donde huyeron 2.810 personas por causa de la violencia; Agustín Codazzi (Cesar), con 2.496 víctimas de desplazamiento y San Francisco (Antioquia), de donde salieron forzosamente 2.155 personas en 2004.

Con el fin de brindar un panorama más claro respecto del impacto demográfico del fenómeno del desplazamiento forzado a nivel municipal, es de gran utilidad contrastar las cifras absolutas de desplazamiento frente al número de pobladores de los municipios expulsos, según datos del Dane para el año 2004. Al considerar la tasa municipal de desplazamiento por cada diez mil habitantes, se obtiene que los diez municipios más afectados por este fenómeno durante 2004 fueron los siguientes:

Como muestra la tabla anterior, el municipio más afectado por la salida de sus pobladores por causa de la violencia en 2004 fue Bojayá (Chocó), con una tasa de desplazamiento de 2.495, que indica que de cada 10 habitantes que había en el municipio, 2 fueron desplazados de manera forzada en 2004. San Francisco (Antioquia), fue el segundo

TASA MUNICIPAL DE DESPLAZAMIENTO POR CADA DIEZ MIL HABITANTES 2004

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TASAS
Chocó	Bojayá	2494,7
Antioquia	San Francisco	1974,2
Guajira	San Juan del Cesar	1233,5
Caquetá	Cartagena del Chairá	832,5
Meta	El Dorado	682,5
Norte de Santander	El Tarra	651,7
Antioquia	San Rafael	583,6
Casanare	Maní	568,5
Meta	El Castillo	566,8
Cauca	Piamonte	509,7

*Fuente: Red de Solidaridad Social
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

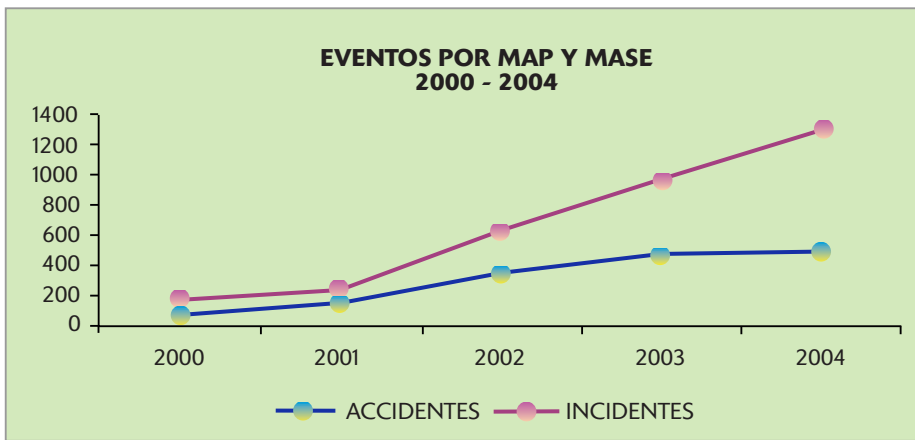
municipio más afectado, con una tasa cercana a 2 habitantes desplazados por cada diez que vivían allí. En la Guajira, salió uno de cada diez habitantes del municipio de San Juan del Cesar. Los demás municipios que se relacionan en la tabla también presentaron altas tasas de desplazamiento durante el año 2004.

Por otra parte, en cuanto a los procesos de retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, según la Consejería para la Acción Social, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2004, retornaron 17.317 familias desplazadas (73.622 personas), gracias a los programas de apoyo y acompañamiento liderados por la Red de Solidaridad Social. De esta cifra, 4.382 familias retornaron durante el último semestre de 2002; 7.786 lo hicieron en 2003 y 5.149 volvieron a sus lugares de origen en 2004. Durante 2004, del total de 5.149 hogares, conformados por 23.325 personas que regresaron a sus localidades, 4.837 corresponden a retornos masivos y 312 a retornos individuales.

Los resultados obtenidos hasta el momento representan un avance del 58% en el cumplimiento de la meta propuesta por el Gobierno Nacional de auspiciar el retorno de 30 mil familias desplazadas durante el cuatrienio 2002-2006.

Minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar

Con base en la información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, en 2004 se presentaron 1.828 eventos por minas antipersonal (Map) y municiones abandonadas sin explotar (Mase).



*Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*



De éstos, 492 fueron accidentes¹⁰⁵ (483 accidentes por Map y 9 por Mase), y 1.336 incidentes¹⁰⁶. Como consecuencia de la dinámica de la confrontación, el 57% de los eventos se concentró en cuatro departamentos: Antioquia 25%, Caquetá 11%, Meta 9% y, Bolívar y Cauca, cada uno con un 6%.

Con respecto al 2003, los eventos en 2004 registraron un aumento del 32%, situación que obedece, principalmente, al incremento del número de incidentes, teniendo en cuenta que éstos representan el 72% del total de eventos. Entre los incidentes, se destacan las acciones desarrolladas por la Fuerza Pública, especialmente el desminado, que concentra el 64% de los incidentes (departamentos de Antioquia, Caquetá y Meta, principalmente) y las incautaciones, con el 31%. Los otros incidentes se refieren a casos de sospecha de campos minados -5%- y el porcentaje restante, a registro de producción de Map, al hallazgo de Mase y al desplazamiento por estos artefactos.

TIPO DE EVENTOS POR MAP Y MASE 2003 Y 2004

EVENTOS	TIPO	2003	2004	VARIACIÓN
ACCIDENTES	Accidente por Map	413	483	17%
	Accidente por Mase	11	9	-18%
Total ACCIDENTES		424	492	16%
INCIDENTES	Desminado Militar	629	850	35%
	Desplazamiento		2	100%
	Incautación	228	410	80%
	Municiones Abandonadas sin Explotar	3	7	133%
	Producción de Minas (Fábrica)	5	6	20%
	Sospecha de Campo Minado	92	61	-34%
Total INCIDENTES		957	1336	40%
Total general		1381	1828	32%

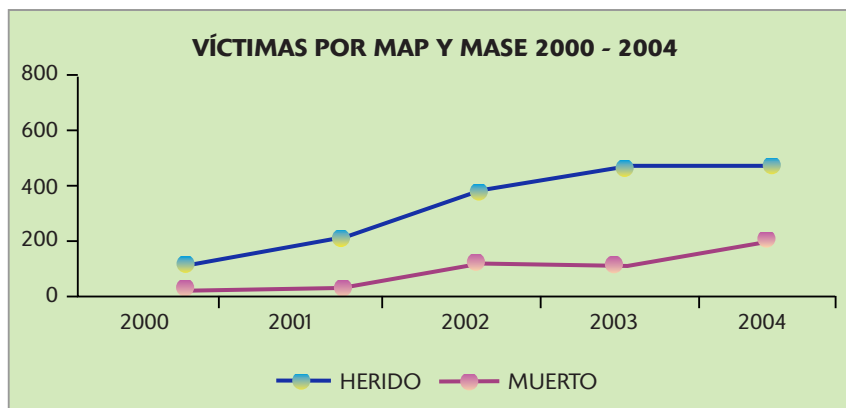
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.

En cuanto a las víctimas, el año 2004 presenta un aumento de 19% (645 heridos y 203 muertos) con respecto al 2003 (546 heridos y 166 muertos). El registro más alto se presentó en octubre con 92 víctimas (68 heridos y 24 muertos) y el menor en noviembre con 42 (36 heridos y 6 muertos).

Debido al efecto indiscriminado de estos artefactos, el 27% de las víctimas fueron civiles, el 72% militares y 1% actores armados irregulares. Frente al 2003, la afectación de la población civil por causa de estos artefactos disminuyó en un 4% (235 en el 2003 y

105 Por accidente se entiende "un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas" (Ley 759/02, Artículo 1).

106 Por incidente, se contempla "un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente" (Ley 759/02, artículo 1).



Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.

225 en el 2004). La situación de particular vulnerabilidad de los militares y policías ha respondido a la ofensiva emprendida por la Fuerza Pública en gran parte del país y en la recuperación de zonas de retaguardia, hasta ahora controladas por los grupos armados ilegales. De igual manera, se sabe que el 7% de estas víctimas son menores de edad, concentrándose el 51% de ellas en el departamento de Antioquia.

Geográficamente, el 58% de las víctimas se localizaron en los departamentos de Antioquia (33%), seguido por Caquetá (14%) y Meta (11%), donde también se encuentran concentrados los incidentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE LAS VÍCTIMAS

ESTADO	CONDICIÓN	2003	2004	VARIACIÓN
Herido	Actor Armado Ilegal	0	1	0%
	Civil	188	171	-9%
	Desconocido	0	1	100%
	Militar	358	472	32%
Total		546	645	18%
Muerto	Actor Armado Ilegal	2	8	300%
	Civil	47	54	15%
	Desconocido	1		100%
	Militar	116	141	22%
Total		166	203	22%
TOTAL GENERAL		712	848	19%

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal
 Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
 Vicepresidencia de la República.



Resultados operacionales de la Fuerza Pública

Contra los grupos de autodefensa

En el 2004, se presentó un aumento del 53% en el número de capturas de miembros de las autodefensas ilegales, al pasar de 3.166 en el 2003 a 4.836 en el 2004.

Por otro lado, en el 2004, 558 miembros de las autodefensas murieron en combate, registrándose un aumento del 61% con respecto al 2003, año en que se presentaron 346.



Fuente: Ministerio de Defensa
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

Contra la subversión

Para el 2004, miembros de la Fuerza Pública capturaron a 6.266 subversivos, disminuyéndose en un 10% la cifra presentada en el 2003, cuando se registraron 6.967.

En cuanto a víctimas fatales, en el 2004 fueron muertos en combate 1.962 subversivos, superando en 2% los 1.919 registros de 2003.



Fuente: Ministerio de Defensa
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

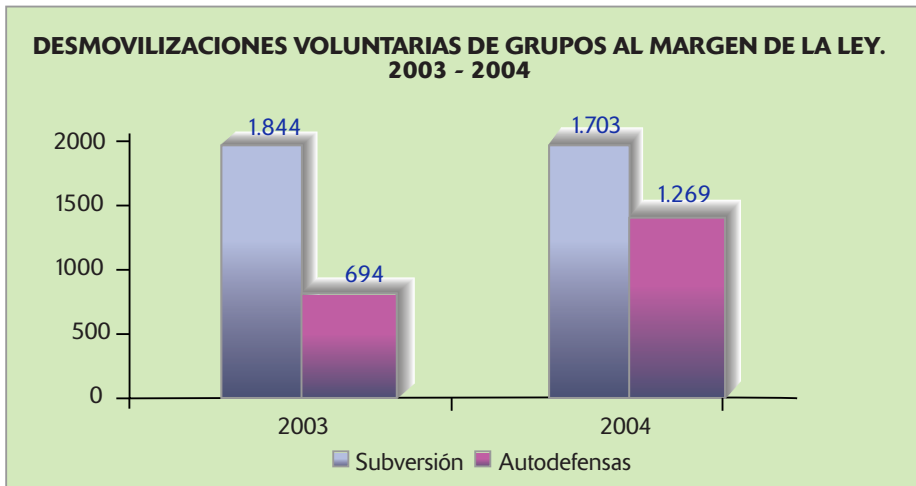
Desmovilizaciones

El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa reporta, al comparar el número de desmovilizaciones que se presentaron entre los años 2003 y 2004, que en el primer año se registraron 2.538 desmovilizaciones voluntarias, mientras en el segundo año considerado se presentaron 2.972 personas desmovilizadas, lo que representa un incremento del 17 % entre los dos años estudiados.

De las 2.972 desmovilizaciones individuales registradas entre enero y diciembre de 2004, 1.299 (44%) corresponden a miembros de las Farc; 1.269 (43%) a miembros de las autodefensas; 334 (11%) al ELN y 70 (2%) corresponden a diferentes disidencias. Es decir, este año se desmovilizaron 1.703 personas vinculadas a la subversión (57%), lo que representa un disminución del 8% en comparación con el año 2003. Con respecto a las autodefensas, se presentó un aumento del 83% en comparación con el año anterior.

En el 2004, el 83 % de los desmovilizados fueron mayores de edad (2.456) y el 17 % fueron menores (516). Así mismo se registra que el 87% de los desmovilizados (2.571) fueron hombres y el 13% (401) mujeres. Por otro lado, la mayoría de los desmovilizados se encuentran entre los 18 y 40 años con un 80 % del total, el 3 % (87) entre los 40 y 60 años y el 17 % (515) son menores de edad, entre los 12 y 17 años.

Al comparar las desmovilizaciones que se presentaron en los años 2003 y 2004, la mayoría de ellas se registraron en los departamentos de Casanare con 449 desmovilizaciones voluntarias, siendo éste el departamento que registró el mayor aumento al pasar de 78



Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa
 Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
 Vicepresidencia de la República.



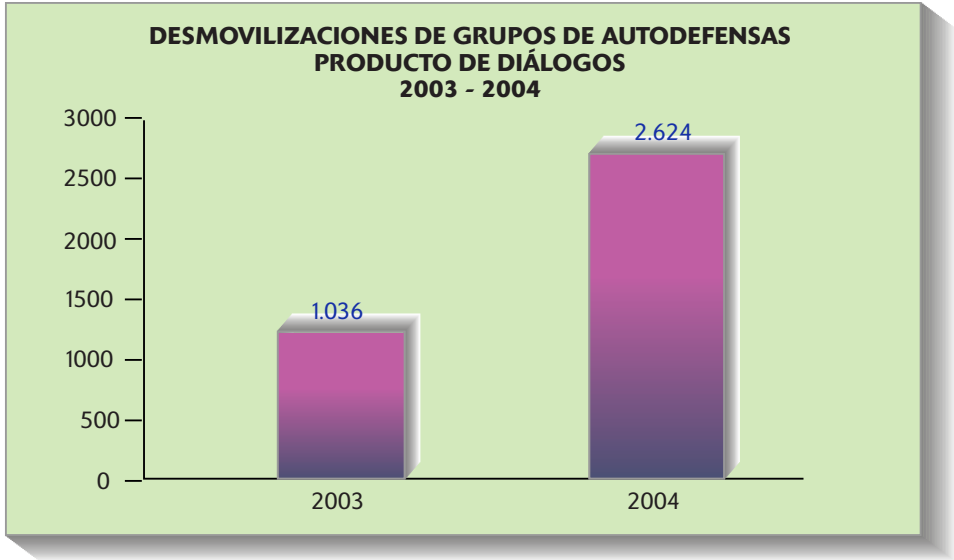
entregas en 2003 a 449 en 2004, lo cual puede estar relacionado en gran medida por las disputas entre grupos de autodefensas en los cuatro últimos meses de 2004. A Casanare le sigue Antioquia, con 411 desmovilizaciones, Meta con 189, Boyacá con 182, Caquetá con 150 y Santander con 144, departamentos que representan el 51% del total de las desmovilizaciones individuales.

Adicionalmente, se registraron aumentos en el número de desmovilizaciones en Vichada, Boyacá, Sucre, Magdalena, Guainía, Arauca, Bolívar, Guaviare, Putumayo, Guajira, Caquetá, Cesar, Atlántico, Tolima, Cauca y Meta. Por otro lado, en Córdoba se mantuvo el mismo nivel del año anterior y en Vaupés, Bogotá, Amazonas, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Valle, Santander, Antioquia y Huila se presentaron disminuciones en el número de entregas voluntarias.

La mayoría de las desmovilizaciones de las Farc se concentraron en Antioquia, Tolima, Caquetá, Guaviare y Meta. Los tres últimos, donde se presentaron el 23% de las desmovilizaciones de este grupo, es el área de despliegue de la operación JM por parte de la Fuerza de Tarea Omega, por lo que se puede considerar estas desmovilizaciones como un impacto de la operación. Con respecto a las autodefensas, la mayoría de sus desmovilizaciones se registraron en Casanare, Antioquia, Boyacá y Meta. Por último las desmovilizaciones del ELN, se presentaron principalmente en Antioquia, Santander y Arauca.

De otro lado, durante los dos últimos años, se han presentado desmovilizaciones masivas, fruto de acercamientos entre el Gobierno y los grupos de autodefensa. Dentro de este marco, durante 2003 se registraron un total de 1.036 desmovilizaciones, de los cuales 868 integrantes pertenecían al bloque Cacique Nutibara, que tienen presencia en el departamento de Antioquia y 168 personas al grupo de autodefensas campesinas de Ortega, que actúan en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. En el año 2004 se registraron 2.624 personas desmovilizadas bajo esta modalidad, cinco bloques de las autodefensas fueron desarticulados en su totalidad y un número de 3.988 armas entregadas.

En este sentido, cumpliendo el Acuerdo de Santa Fe de Ralito por la Paz de Colombia, firmado entre el Gobierno y las autodefensas el 25 de julio de 2003 y ratificado el 7 de octubre de 2004 se presentó, el 25 de noviembre de 2004 en Turbo, departamento de Antioquia, la desmovilización de 447 hombres, integrantes del bloque Bananero de las autodefensas. El 4 de diciembre de 2004, en Santa Rosa, Magdalena, se desmovilizaron un total de 47 miembros de las autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando. El 9 de diciembre de 2004 en Terán, Yacopí, Cundinamarca, se desmovilizaron un total de 148 miembros del bloque Cundinamarca de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 10 de diciembre de 2004 en el corregimiento de Campo Dos, departamento de Norte de Santander, se desmovilizaron 1.425 hombres del bloque Catatumbo. Finalmente el 18 de diciembre de 2004 en Galicia, Valle del Cauca, se desmovilizaron un total de 557 hombres del bloque Calima.



*Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa
Procesado por: Observatorio de DH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
Vicepresidencia de la República.*

En conclusión, si se suma los 2.972 desmovilizados de manera voluntaria y las 2.624 desmovilizaciones masivas, producto de los acercamientos del Gobierno con los grupos de autodefensa durante el año 2004, se observa que en total se han desmovilizado 5.596 hombres pertenecientes a grupos irregulares, que fueron reincorporados a la vida civil y tienen ahora una opción de vida digna.



CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA Comparativo 2003 - 2004



**Observatorio del
Programa Presidencial
de Derechos Humanos
y DIH**

	2003	2004	Variación porcentual
Homicidios	23.507	20.167	-14%
Víctimas de masacres	504	259	-49%
Casos de masacres	94	45	-52%
Homicidios sindicalistas	47	42*	-11%
Homicidios de alcaldes y exalcaldes	12	14	17%
Homicidios de Concejales	75	18	-76%
Homicidios de Indígenas	211	86	-59%
Homicidios de Docentes Sindicalizados	54	48	13%
Homicidios Docentes no Sindicalizados	0	20	-
Homicidios de Periodistas	7	3	-57%
Secuestros	2.200	1.441	-35%
Accidentes por Map y Mase	424	492	16%
Incidentes por Map y Mase	957	1.336	40%
Heridos por Map y Mase	546	645	18%
Muertos por Map y Mase	166	203	22%
Ataques a poblaciones	5	4	-20%
Desplazamiento forzado	219.461	155.184	-29%
Ataques contra torres de comunicaciones	19	2	-89%
Ataques contra torres de energía	329	121	-63%
Ataques contra puentes	33	7	-79%
Ataques contra oleductos	139	81	-42%
Ataques contra vías	113	134	19%
Actos de Terrorismo	1.257	724	-42%
Ataques contra acueductos	3	1	-67%
Miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados.	694	1.269	83%
Miembros de la subversión desmovilizados	1.844	1.703	-8%
Miembros de grupos de autodefensa capturados	3.166	4.836	53%
Miembros de grupos de autodefensa muertos en combate por la Fuerza Pública	346	558	61%
Subversivos muertos en combate	1.919	1.962	2%
Subversivos capturados por la Fuerza Pública	6.967	6.266	-10%

La cifra presentada durante este año es el resultado del cotejo de las siguientes fuentes: Ministerio de la Protección Social, Fecode, Cut, ENS y CIC de la Policía Nacional.



**CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA**
Comparativo enero a junio 2004 y 2005



**Observatorio del
Programa Presidencial
de Derechos Humanos
y DIH**

	ENE/JUN. 2004	ENE/JUN. 2005	Variación porcentual
Homicidios	10.781	8.559	-21%
Víctimas de masacres	161	131	-14%
Casos de masacres	29	26	-10%
Homicidios sindicalistas	27	6	-78%
Homicidios de alcaldes y ex-alcaldes	11	7	-57%
Homicidios de concejales	11	16	45%
Homicidios de indígenas	56	25	-55%
Homicidios de Docentes Sindicalizados	31	18	-42%
Homicidios Docentes no Sindicalizados	8	4	-50%
Homicidios de periodistas	3	2	-33%
Secuestros	878	350	-60%
Eventos por Map y Mase	1.828	653	-64%
Heridos por Map y Mase	645	343	-47%
Muertos por Map y Mase	203	117	-42%
Desplazamiento forzado	92.272	57.127	-38%
Ataques contra oleoductos	57	58	2%
Ataques contra torres de comunicaciones	2	1	-50%
Ataques contra torres de energía	75	70	-7%
Ataques contra puentes	5	3	-40%
Ataques contra vías	32	17	47%
Actos de Terrorismo	435	275	-37%
Ataques contra acueductos	1	0	-100%
Informes de riesgo emitidos	54	25	-54%
Miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados	465	544	17%
Miembros de la subversión desmovilizados	878	779	-11%
Miembros de grupos de autodefensa muertos en combate por la Fuerza Pública	316	194	-39%
Miembros de grupos de autodefensa capturados	2.434	1.713	-30%
Subversivos muertos en combate	1.034	989	-4%
Subversivos capturados por la Fuerza Pública	3.849	2.648	-31%

La cifra presentada durante este año es el resultado del cotejo de las siguientes fuentes: Ministerio de la Protección Social, Fecode, Cut, ENS y CIC de la Policía Nacional.